

MODIFICACION DE MEDIDAS. REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS. El padre tiene que pagar una pensión de alimentos 1.600 euros por los dos hijos y solicita que se rebaje a 1.000€. La audiencia provincial confirma la sentencia del juzgado y dice, que en su momento el divorcio fue de mutuo acuerdo, y para fijar esos 1.600 € no se tuvieron en cuenta los ingresos del trabajo sino también los rendimientos notables de su patrimonio. Ahora el padre alega que fue despedido de la empresa y que sus únicos ingresos son 1.200 euros al mes y que esta se agota en cubrir sus propios gastos de manutención y abono de su parte correspondiente a los gastos de la vivienda en que reside con su actual esposa y los hijos de esta, pero la audiencia no se lo cree y dice que de ser esto cierto no se entiende como parece al menos dispuesto a abonar a sus hijos una pensión de 500 € mensuales anualmente actualizables.

Además la audiencia dice que en su momento el demandante no dijo nada de la situación económica de la demandada y que ahora en el recurso no se puede tener en cuenta y no lo tiene en cuenta.

Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 28 de diciembre 2021. Número Sentencia: 485/2021 Número Recurso: 315/2021 . Ponente: [José Ramón Alonso-Mañero Pardal](#). Origen instancia 10

Cabecera: Convenio regulador. Divorcio. Alimentos a favor de hijo mayor de edad

Interpone recurso de apelación contra la sentencia que ha sido dictada en el procedimiento matrimonial que se ha seguido con el número 182/2018 ante el juzgado de primera instancia número diez de Valladolid sobre modificación de las medidas definitivas adoptadas en anterior **procedimiento de divorcio** interesando tan solo la parcial revocación de dicha resolución, pues limita su impugnación al pronunciamiento del apartado segundo del fallo por el que la juez de instancia decide mantener la pensión alimenticia establecida a su cargo en los mismo términos dispuestos en la **sentencia de divorcio** de fecha 05/02/2013 esto es, por importe de 800 euros mensuales por cada uno de los hijos de los litigantes .

PROCESAL: Legitimación del ministerio fiscal

Jurisdicción: Civil

Ponente: [José Ramón Alonso-Mañero Pardal](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 28/12/2021

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Primera

Número Sentencia: 485/2021

Número Recurso: 315/2021

Numroj: SAP VA 1927/2021

Ecli: ES:APVA:2021:1927

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00485/2021

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 Fax: 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MSV

N.I.G. 47186 42 1 2012 0016830

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000315 /2021

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 10 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: MMC MODIFICACION DE MEDIDAS SUPUESTO
CONTENCIOSO 0000182 /2018

Recurrente: Nazario

Procurador: MARIA CARMEN DE BENITO GUTIERREZ

Abogado: MARÍA MILAGROS NORIEGA BAYÓN

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Elisabeth

Procurador: , FERNANDO RUIZ LOPEZ

Abogado: , HORACIO PARRILLA LEOZ

S E N T E N C I A Nº 485/2021

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO-JAVIER CARRANZA CANTERA

D. JOSÉ-RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL

D^a EMMA GALCERÁN SOLSONA

En VALLADOLID, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos de MODIFICACIÓN DE MEDIDAS SUPUESTO CONTENCIOSO nº 182/2018 del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Valladolid, seguido entre partes, de una, como DEMANDANTE-APELANTE, D. Nazario, representado por la Procuradora D^a M^a del Carmen de Benito Gutiérrez y defendido por la Letrada D^a M^a Milagros Noriega Bayón; y de otra, como DEMANDADA-APELADA, D^a Elisabeth, representada por el Procurador D. Fernando Ruiz López y defendido por el Letrado D. Horacio Parrilla Leoz; habiendo intervenido el MINISTERIO FISCAL en la representación que le es propia.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 25/03/2021, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Estimando en parte la demanda de Modificación de Medidas promovida por la Procuradora Sra. de Benito Gutiérrez en nombre y representación de D. Nazario frente a D. Elisabeth que ha estado representada por el Procurador D. Fernando Ruiz López, ACUERDO

1º.-Se establece un régimen de visita de D. Nazario con sus hijos menores el último fin de semana de cada mes desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 20,00 horas y dos tardes inter-semanales con un preaviso a la madre de cuatro días y en un horario que no pertube permaneciendo los periodos vacacionales conforme se acordó en sentencia de Divorcio de Mutuo Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2013 dictada en el procedimiento 58/2012

2º.-Se mantiene la pensión de alimentos de 1.600 euros (800 euros para cada uno de los hijos) establecida en sentencia de Divorcio de 5 de febrero de 2013 dictada en el procedimiento 958/2012 que aprobaba la propuesta de Convenio Regulador de 12 de octubre de 2012. Esta pensión actualizada a esta fecha seguirá actualizándose conforme al IPC

3º.-Se limita el uso y disfrute de la vivienda familiar sita en la CALLE 000 nº NUM 000 de Valladolid hasta que la hija menor, Josefa alcance la mayoría de edad.

No se hace expresa imposición de costas."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación procesal de la parte demandada se interpuso recurso de apelación dentro del término legal, alegando lo que estimó oportuno. Por la parte demandante y por el Ministerio Fiscal se presentaron sendos escritos de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, tras la tramitación correspondiente, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 23/12/2021, en el que tuvo lugar lo acordado.

Vistos, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ-RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- D. Nazario interpone recurso de apelación contra la sentencia que ha sido dictada en el procedimiento matrimonial que se ha seguido con el número 182/2018 ante el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Valladolid sobre Modificación de las Medidas Definitivas adoptadas en anterior procedimiento de divorcio interesando tan solo la parcial revocación de dicha resolución, pues limita su impugnación al pronunciamiento del apartado segundo del fallo por el que la Juez de Instancia decide mantener la pensión alimenticia establecida a su cargo en los mismo términos dispuestos en la sentencia de divorcio de fecha 5 de febrero de 2013, esto es, por importe de 800 € mensuales por cada uno de los hijos de los litigantes (1.600 € en total).

Interesa el apelante en su recurso que se revoque el pronunciamiento efectuado en el referido apartado y que, en su lugar, se acuerde que la pensión alimenticia a su cargo sea de 500 € al mes en total (es decir, 250 € por hijo).

Defiende el apelante en su recurso como principal motivo del mismo que, en contra de lo indicado por la Juez de Instancia, debe considerarse acreditado el sustancial cambio de las circunstancias que fueron tenidas en consideración al tiempo de establecer la pensión de alimentos para los hijos comunes en el acuerdo alcanzado en el año 2012 que fue incorporado a la sentencia de divorcio. Se denuncia para ello en el recurso el error en la valoración de la prueba en que se considera que incurre la Juez de Instancia, así como la vulneración que asimismo se entiende comete la resolución recurrida de lo establecido en los artículos 146 y 147 del Código Civil.

El Ministerio Fiscal se opone al recurso en dichos términos interpuesto e interesa la confirmación de la resolución dictada en la instancia tras concluir que de la prueba practicada en las actuaciones debe mantenerse la decisión de la Juez de Instancia.

SEGUNDO.- El recurso de apelación en dichos términos interpuesto no puede ser estimado por este Tribunal de Apelación. Su más adecuada solución determina la necesidad de entrar en el examen y valoración de toda la prueba que obra unida a las actuaciones y ha sido tenida en consideración por la Juez de Instancia, pues el carácter ordinario del recurso de apelación -que efectivamente lo es-, somete al Tribunal que del mismo entiende el total conocimiento de la controversia suscitada, si bien siempre dentro de los límites del objeto o contenido del recurso y con respeto a la obligada congruencia. Desde esta perspectiva cabe señalar sin embargo que, tal y como ya es criterio uniforme, reiterado y constante de esta misma Audiencia Provincial (Sección Primera) en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado, entre otras, en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2015, que aún a pesar de las amplias facultades revisoras de que goza el Tribunal "ad quem" solo será factible criticar la valoración que efectúe el Juzgador "a quo" de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia fuese ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica (SSTS de 9 de marzo de 2010, 11 de noviembre de 2010); se hubiera incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002); se extrajeran de la misma conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004); o finalmente, si se adoptasen en ella criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2002).

Así las cosas, acontece de lo que consta actuado en el procedimiento que nos ocupa que la aplicación al supuesto enjuiciado del anterior criterio jurisprudencial sobre valoración de prueba ha de llevar necesariamente a este Tribunal de Apelación a la misma conclusión que la obtenida por la Juez de Instancia, cuyos acertados razonamientos en lo sustancial expresamente se aceptan, asumen y hacen enteramente propios, dándoles íntegramente por reproducidos al objeto de evitar innecesarias repeticiones, ya que lejos de incurrir la Juzgadora "a quo" en los errores de valoración y/o interpretación probatoria denunciados en el recurso, se lleva a cabo en la resolución recurrida un más que detallado y suficiente examen de la cuestión objeto de controversia que llevan a dicha Juzgadora a una conclusión que, al margen de mínimas e intrascendentes diferencias de matiz, este Tribunal comparte plenamente, y todo ello sin que pese al muy notable y extenso esfuerzo argumental del recurso puedan servir los alegatos de la parte apelante al pretendido efecto de sustituir el imparcial, lógico, recto y objetivo criterio de la Juez de Instancia por los muy legítimos pero subjetivos, parciales e interesados de la parte aquí apelante.

TERCERO.- En todo caso, y al solo objeto de dar una más cumplida contestación a los términos del recurso de apelación que ha sido interpuesto debe señalarse, a mayor abundamiento de lo que de manera suficientemente detallada y pormenorizada se explicita en la resolución recurrida, que no puede apreciarse por este Tribunal que incurra la Juzgadora de Instancia en infracción legal alguna que justifique la pretendida revocación de la decisión que ha sido adoptada en la resolución que se impugna, dado que de lo actuado, probado y obrante en autos se constata una más que suficiente justificación probatoria que corrobora la decisión adoptada en la resolución recurrida.

Muy al contrario de lo que se indica por el apelante en su recurso y constituye el argumento que sostiene al mismo resulta que, tras un ponderado examen de la prueba documental que obra en las actuaciones, ni es cierto que la pensión de alimentos se fijase en el convenio regulador atendiendo única y exclusivamente a los ingresos que en aquel momento (año 2012) percibiese D. Nazario a consecuencia de su trabajo por cuenta ajena, como enfatiza en su recurso, ni aún para el caso de que así hubiera sido, ello sería suficiente para enervar el mandato de los artículos 146 y 147 del Código Civil.

I-. Por lo que se refiere a la primera cuestión, **lo que el convenio regulador incorporado a la sentencia de divorcio recogía realmente es que la pensión alimenticia se establecía en la cantidad de 1.600 € mensuales** " sobre la base de que el esposo en estos momentos percibe ingresos bastantes y suficientes para hacer frente a esta cantidad". Es innegable que los emolumentos que percibiese D. Nazario por causa de la actividad laboral por cuenta ajena que en aquel momento desarrollaba necesariamente eran importantes al tiempo de fijar la carga alimenticia, pero no puede sostenerse, como se hace en el recurso, **que esta fuera la única razón por la que se fijasen los alimentos en la cuantía antes indicada,** ya que de los rendimientos de su notable patrimonio en aquélla fecha -lo que no parece ser objeto de discusión-, **necesariamente se producirían rendimientos que integrarían el concepto genérico, vago e inconcreto término de "ingresos bastantes y suficientes" a que se refería el convenio regulador** y por consiguiente la sentencia de divorcio.

II-. En segundo lugar, porque aún para el caso de que ese hubiera sido el designio de las partes al tiempo de la firma del convenio regulador, acontece que la obligación de prestación de alimentos a los hijos menores de edad es una obligación legal consagrada en nuestra Constitución (artículo 39) y normativa reguladora de los derechos de los menores que viene determinada por lo establecido específicamente en los artículos 142 y siguientes del Código Civil y, muy significativamente en lo que ahora nos ocupa, por los artículos 146 y 147 de dicho texto legal en los que se hace alusión a que la cuantía de los alimentos será proporcionada al "...caudal o medios de quien los da" (artículo 146), y que su aumento o reducción será también proporcional "... a la fortuna del que hubiere de satisfacerlos" (artículo 147), por lo que con independencia de lo que las propias partes litigantes hubieran resuelto al respecto, la fijación y concreción de la prestación alimenticia a favor de los hijos menores de edad, en cuanto cuestión de orden público que es, puede ser establecida por el Juez de Instancia atendiendo al resultado de la prueba practicada en el procedimiento.

CUARTO.- Señalado cuanto antecede y concluyendo que aunque obviamente es cierto que los ingresos por cuenta ajena que percibía D. Nazario al tiempo de la firma del convenio regulador desaparecieron tras ser despedido de la empresa para la que trabajaba, **es también incuestionable**, como en definitiva concluye la Juez de Instancia de su pormenorizado y detallado análisis del devenir laboral, profesional y personal del ahora apelante desde aquel momento en la resolución recurrida y sobre el que ambas parten en sus extensísimos escritos alegatorios no hacen sino matizar puntillosamente cada uno de los razonamientos de la Juez de Instancia, que deben compartirse las conclusiones que se obtienen en la sentencia objeto de recurso, puesto que debe señalarse que se comparte la tesis de la resolución recurrida -en la que coincide el Ministerio Fiscal-, para determinar que pese al despido laboral del apelante en el año 2015 toda su actuación posterior revela conforme a la documental aportada al procedimiento **y signos externos** a los que la Juez de Instancia se refiere concisamente, que sigue manteniendo un patrimonio mobiliario e inmobiliario, amén de ingresos efectivos, que le permiten seguir cumpliendo con su primordial obligación legal de prestar alimentos a sus hijos en los términos en que fue acordado por ambos litigantes al tiempo del divorcio en el año 2012, no siendo de recibo el argumento , por contradictorio, en el que se sostiene que su únicos ingresos son los derivados de su actual nómina (1.200 €) y que la misma se agota en cubrir sus propios gastos de manutención y abono de su parte correspondiente a los gastos de la vivienda en que reside con su actual esposa y los hijos de esta, pues se ser esto cierto no se entiende como parece al menos dispuesto a abonar a sus hijos una pensión de 500 € mensuales anualmente actualizables.

Por otra parte, **se introduce en el recurso un alegato relativo a la situación económica de Dª Elisabeth** , obviando que la misma no resulta determinante en esta litis **ya que en la demanda de modificación** de medidas rectora de este procedimiento lo que se invocaba como motivo de la pretensión actora de modificación de las medidas definitivas vigentes por D. Nazario era el cambio de circunstancias producido por la alegada disminución de sus emolumentos sin mención alguna a las circunstancias de Dª Elisabeth , que por tanto en lo sustancial no deben ser examinadas en este procedimiento ya que el mismo se dirige, única y exclusivamente, a determinar las condiciones y alcance de la

contribución de D. Nazario a los alimentos de sus hijos, dándose por descontado que D^a Elisabeth como progenitora custodia, al margen de su situación personal, también participa y contribuye a los alimentos de los menores no solamente con su necesaria aportación dineraria, sino también prestando en especie dichos alimentos a los hijos que están bajo su guarda con su continua asistencia, ayuda afectiva y moral, presencia, cuidados personales y cuantas atenciones resultan necesarias e imprescindible para el normal desarrollo de la vida de dichos menores.

Es por todo lo indicado que no se considera que la Juzgadora "a quo" haya incurrido en ninguno de los errores que se denuncian en el escrito de interposición del recurso y por tanto debe ser confirmada la decisión que ha sido adoptada en la instancia.

QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación determina que en materia de costas procesales deban serle impuestas a la parte apelante las causadas por esta apelación. Arts. 394 y 398 de la L.E.C.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

1º.-Se establece un régimen de visita de D. Nazario con sus hijos menores el último fin de semana de cada mes desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 20,00 horas y dos tardes inter-semanales con un preaviso a la madre de cuatro días y en un horario que no pertube permaneciendo los periodos vacacionales conforme se acordó en sentencia de Divorcio de Mutuo Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2013 dictada en el procedimiento 58/2012 2º.-Se mantiene la pensión de alimentos de 1.600 euros (800 euros para cada uno de los hijos) establecida en sentencia de Divorcio de 5 de febrero de 2013 dictada en el procedimiento 958/2012 que aprobaba la propuesta de Convenio Regulador de 12 de octubre de 2012. Esta pensión actualizada a esta fecha seguirá actualizándose conforme al IPC 3º.-Se limita el uso y disfrute de la vivienda familiar sita en la CALLE000 nº NUM000 de Valladolid hasta que la hija menor, Josefa alcance la mayoría de edad.

No se hace expresa imposición de costas."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación procesal de la parte demandada se interpuso recurso de apelación dentro del término legal, alegando lo que estimó oportuno. Por la parte demandante y por el Ministerio Fiscal se presentaron sendos escritos de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, tras la tramitación correspondiente, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 23/12/2021, en el que tuvo lugar lo acordado.

Vistos, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ-RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D. Nazario interpone recurso de apelación contra la sentencia que ha sido dictada en el procedimiento matrimonial que se ha seguido con el número 182/2018 ante el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Valladolid sobre Modificación de las

Medidas Definitivas adoptadas en anterior procedimiento de divorcio interesando tan solo la parcial revocación de dicha resolución, pues limita su impugnación al pronunciamiento del apartado segundo del fallo por el que la Juez de Instancia decide mantener la pensión alimenticia establecida a su cargo en los mismo términos dispuestos en la sentencia de divorcio de fecha 5 de febrero de 2013, esto es, por importe de 800 € mensuales por cada uno de los hijos de los litigantes (1.600 € en total).

Interesa el apelante en su recurso que se revoque el pronunciamiento efectuado en el referido apartado y que, en su lugar, se acuerde que la pensión alimenticia a su cargo sea de 500 € al mes en total (es decir, 250 € por hijo).

Defiende el apelante en su recurso como principal motivo del mismo que, en contra de lo indicado por la Juez de Instancia, debe considerarse acreditado el sustancial cambio de las circunstancias que fueron tenidas en consideración al tiempo de establecer la pensión de alimentos para los hijos comunes en el acuerdo alcanzado en el año 2012 que fue incorporado a la sentencia de divorcio. Se denuncia para ello en el recurso el error en la valoración de la prueba en que se considera que incurre la Juez de Instancia, así como la vulneración que asimismo se entiende comete la resolución recurrida de lo establecido en los artículos 146 y 147 del Código Civil.

El Ministerio Fiscal se opone al recurso en dichos términos interpuesto e interesa la confirmación de la resolución dictada en la instancia tras concluir que de la prueba practicada en las actuaciones debe mantenerse la decisión de la Juez de Instancia.

SEGUNDO.- El recurso de apelación en dichos términos interpuesto no puede ser estimado por este Tribunal de Apelación. Su más adecuada solución determina la necesidad de entrar en el examen y valoración de toda la prueba que obra unida a las actuaciones y ha sido tenida en consideración por la Juez de Instancia, pues el carácter ordinario del recurso de apelación -que efectivamente lo es-, somete al Tribunal que del mismo entiende el total conocimiento de la controversia suscitada, si bien siempre dentro de los límites del objeto o contenido del recurso y con respeto a la obligada congruencia. Desde esta perspectiva cabe señalar sin embargo que, tal y como ya es criterio uniforme, reiterado y constante de esta misma Audiencia Provincial (Sección Primera) en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado, entre otras, en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2015, que aún a pesar de las amplias facultades revisoras de que goza el Tribunal "ad quem" solo será factible criticar la valoración que efectúe el Juzgador "a quo" de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia fuese ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica (SSTS de 9 de marzo de 2010, 11 de noviembre de 2010); se hubiera incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002); se extrajeren de la misma conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004); o finalmente, si se adoptasen en ella criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2002).

Así las cosas, acontece de lo que consta actuado en el procedimiento que nos ocupa que la aplicación al supuesto enjuiciado del anterior criterio jurisprudencial sobre valoración de prueba ha de llevar necesariamente a este Tribunal de Apelación a la misma conclusión que la obtenida por la Juez de Instancia, cuyos acertados razonamientos en lo sustancial expresamente se aceptan, asumen y hacen enteramente propios, dándoles íntegramente por reproducidos al objeto de evitar innecesarias repeticiones, ya que lejos de incurrir la Juzgadora "a quo" en los errores de valoración y/o interpretación probatoria denunciados

en el recurso, se lleva a cabo en la resolución recurrida un más que detallado y suficiente examen de la cuestión objeto de controversia que llevan a dicha Juzgadora a una conclusión que, al margen de mínimas e intrascendentes diferencias de matiz, este Tribunal comparte plenamente, y todo ello sin que pese al muy notable y extenso esfuerzo argumental del recurso puedan servir los alegatos de la parte apelante al pretendido efecto de sustituir el imparcial, lógico, recto y objetivo criterio de la Juez de Instancia por los muy legítimos pero subjetivos, parciales e interesados de la parte aquí apelante.

TERCERO.- En todo caso, y al solo objeto de dar una más cumplida contestación a los términos del recurso de apelación que ha sido interpuesto debe señalarse, a mayor abundamiento de lo que de manera suficientemente detallada y pormenorizada se explicita en la resolución recurrida, que no puede apreciarse por este Tribunal que incurra la Juzgadora de Instancia en infracción legal alguna que justifique la pretendida revocación de la decisión que ha sido adoptada en la resolución que se impugna, dado que de lo actuado, probado y obrante en autos se constata una más que suficiente justificación probatoria que corrobora la decisión adoptada en la resolución recurrida.

Muy al contrario de lo que se indica por el apelante en su recurso y constituye el argumento que sostiene al mismo resulta que, tras un ponderado examen de la prueba documental que obra en las actuaciones, ni es cierto que la pensión de alimentos se fijase en el convenio regulador atendiendo única y exclusivamente a los ingresos que en aquel momento (año 2012) percibiese D. Nazario a consecuencia de su trabajo por cuenta ajena, como enfatiza en su recurso, ni aún para el caso de que así hubiera sido, ello sería suficiente para enervar el mandato de los artículos 146 y 147 del Código Civil.

I-. Por lo que se refiere a la primera cuestión, lo que el convenio regulador incorporado a la sentencia de divorcio recogía realmente es que la pensión alimenticia se establecía en la cantidad de 1.600 € mensuales " sobre la base de que el esposo en estos momentos percibe ingresos bastantes y suficientes para hacer frente a esta cantidad". Es innegable que los emolumentos que percibiese D. Nazario por causa de la actividad laboral por cuenta ajena que en aquel momento desarrollaba necesariamente eran importantes al tiempo de fijar la carga alimenticia, pero no puede sostenerse, como se hace en el recurso, que esta fuera la única razón por la que se fijasen los alimentos en la cuantía antes indicada, ya que de los rendimientos de su notable patrimonio en aquella fecha -lo que no parece ser objeto de discusión-, necesariamente se producirían rendimientos que integrarían el concepto genérico, vago e inconcreto término de "ingresos bastantes y suficientes" a que se refería el convenio regulador y por consiguiente la sentencia de divorcio.

II-. En segundo lugar, porque aún para el caso de que ese hubiera sido el designio de las partes al tiempo de la firma del convenio regulador, acontece que la obligación de prestación de alimentos a los hijos menores de edad es una obligación legal consagrada en nuestra Constitución (artículo 39) y normativa reguladora de los derechos de los menores que viene determinada por lo establecido específicamente en los artículos 142 y siguientes del Código Civil y, muy significativamente en lo que ahora nos ocupa, por los artículos 146 y 147 de dicho texto legal en los que se hace alusión a que la cuantía de los alimentos será proporcionada al "...

caudal o medios de quien los da" (artículo 146), y que su aumento o reducción será también proporcional "... a la fortuna del que hubiere de satisfacerlos" (artículo 147), por lo que con independencia de lo que las propias partes litigantes hubieran resuelto al respecto, la fijación y concreción de la prestación alimenticia a favor de los hijos menores

de edad, en cuanto cuestión de orden público que es, puede ser establecida por el Juez de Instancia atendiendo al resultado de la prueba practicada en el procedimiento.

CUARTO.- Señalado cuanto antecede y concluyendo que aunque obviamente es cierto que los ingresos por cuenta ajena que percibía D. Nazario al tiempo de la firma del convenio regulador desaparecieron tras ser despedido de la empresa para la que trabajaba, es también incuestionable, como en definitiva concluye la Juez de Instancia de su pormenorizado y detallado análisis del devenir laboral, profesional y personal del ahora apelante desde aquel momento en la resolución recurrida y sobre el que ambas parten en sus extensísimos escritos alegatorios no hacen sino matizar puntillosamente cada uno de los razonamientos de la Juez de Instancia, que deben compartirse las conclusiones que se obtienen en la sentencia objeto de recurso, puesto que debe señalarse que se comparte la tesis de la resolución recurrida -en la que coincide el Ministerio Fiscal-, para determinar que pese al despido laboral del apelante en el año 2015 toda su actuación posterior revela conforme a la documental aportada al procedimiento y signos externos a los que la Juez de Instancia se refiere concisamente, que sigue manteniendo un patrimonio mobiliario e inmobiliario, amén de ingresos efectivos, que le permiten seguir cumpliendo con su primordial obligación legal de prestar alimentos a sus hijos en los términos en que fue acordado por ambos litigantes al tiempo del divorcio en el año 2012, no siendo de recibo el argumento , por contradictorio, en el que se sostiene que su únicos ingresos son los derivados de su actual nómina (1.200 €) y que la misma se agota en cubrir sus propios gastos de manutención y abono de su parte correspondiente a los gastos de la vivienda en que reside con su actual esposa y los hijos de esta, pues se ser esto cierto no se entiende como parece al menos dispuesto a abonar a sus hijos una pensión de 500 € mensuales anualmente actualizables.

Por otra parte, se introduce en el recurso un alegato relativo a la situación económica de D^a Elisabeth , obviando que la misma no resulta determinante en esta litis ya que en la demanda de modificación de medidas rectora de este procedimiento lo que se invocaba como motivo de la pretensión actora de modificación de las medidas definitivas vigentes por D. Nazario era el cambio de circunstancias producido por la alegada disminución de sus emolumentos sin mención alguna a las circunstancias de D^a Elisabeth , que por tanto en lo sustancial no deben ser examinadas en este procedimiento ya que el mismo se dirige, única y exclusivamente, a determinar las condiciones y alcance de la contribución de D. Nazario a los alimentos de sus hijos, dándose por descontado que D^a Elisabeth como progenitora custodia, al margen de su situación personal, también participa y contribuye a los alimentos de los menores no solamente con su necesaria aportación dineraria, sino también prestando en especie dichos alimentos a los hijos que están bajo su guarda con su continua asistencia, ayuda afectiva y moral, presencia, cuidados personales y cuantas atenciones resultan necesarias e imprescindible para el normal desarrollo de la vida de dichos menores.

Es por todo lo indicado que no se considera que la Juzgadora "a quo" haya incurrido en ninguno de los errores que se denuncian en el escrito de interposición del recurso y por tanto debe ser confirmada la decisión que ha sido adoptada en la instancia.

QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación determina que en materia de costas procesales deban serle impuestas a la parte apelante las causadas por esta apelación. Arts. 394 y 398 de la L.E.C.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, F A L L A M O S Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que

ha sido dictada con fecha 25 de marzo de 2021 en el procedimiento matrimonial de Modificación de Medidas Definitivas que se ha seguido con el número 182/2018 ante el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Valladolid, debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, imponiendo a la parte apelante expresa condena en las costas procesales causadas por esta apelación.

La confirmación de la resolución de instancia supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, al que se dará el destino legal. (D. A. 15ª de la L.O.P.J. según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre).

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.